

lasquez.—V. Zavala.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 20 de Noviembre de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por el C. Francisco Cagigal en representacion de D. Pio Bermejillo, contra la Direccion general de Rentas, por violacion de garantías.*

*Alegato del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo seguido por D. Pio Bermejillo contra la cobranza económico-coactiva que le hace la Direccion de Rentas, de las alcabalas que se dicen causadas por la venta y retroventa de las Haciendas de San Vicente, Dolores y Chiconcuac, y que con las multas y gastos de cobranza se hacen ascender á \$212,274 39 centavos, su estado supuesto que es el de alegar, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar que la parte quejosa ha probado bien y cumplidamente, que con el procedimiento reclamado se violan en su persona las garantías individuales invocadas en este recurso, y por consiguiente que la Justicia de la Union le ampara y protege contra ese procedimiento, pues así debe hacerse segun consta de los fundamentos legales que paso á esponer.

Abierto este recurso á prueba conforme á la peticion del que suscribe, la parte del Sr. Bermejillo pidió que se hiciera reconocer en estos autos la carta que el depositario nombrado por la Direccion general de Rentas, dirigió á D. Braulio Eguia en 30 de Noviembre, y que obra á fojas 77 de estos autos. Por esa carta reconocida, consta que segun las instrucciones de la Direccion,

debían paralizarse en lo absoluto, los trabajos de las Haciendas embargadas, tanto en el campo como en la finca, y toda reparacion en la maquinaria y oficinas, sin que se permitiera regar ni dar beneficio alguno á la caña que estuviera para cortarse; y esas prohibiciones justifican plenamente el parecer del que suscribe relativo al auto de suspension, y al amparo que contra ese auto promovió el Director de Rentas, y que está todavía por resolver.

A solicitud tambien del quejoso, se pidió informe á la Direccion de Rentas sobre la cantidad que se cobra al Sr. Bermejillo, y las partidas de que se compone, y además copia íntegra del expediente que, relativo á esa cobranza, formó la misma Direccion. Por ese informe y copia que obran de fojas 79 á 88, consta que computado el valor de las Haciendas para las alcabalas que se dicen causadas en 1851 y 1852, en \$399,556 48 centavos, se hace ascender la alcabala por la primera venta al 25 por ciento de ese valor, conforme al artículo 12 de la ley de 31 de Mayo de 1851 que dá \$99,889 12 centavos, y la de la retroventa de la misma manera, á \$99,889 13 centavos, cuyas cantidades unidas á la de \$12,496 14 centavos, por gastos de cobranza, dan un adeudo total de \$212,274 39 centavos.

La Direccion advierte, que en el mandamiento de pago que libró al Sr. Bermejillo, cobró solo \$212,254 39 centavos, por un error de suma en las cantidades referidas. Consta además, que en 14 de Agosto próximo pasado, el denunciante D. Pedro Bueno, presentó un ocurso al Gobierno del Estado gestionando la cobranza del adeudo, al que recayó un acuerdo de 16 del mismo, mandándolo pasar á la Direccion para que procediera con arreglo á sus atribuciones, y en el mismo día la Direccion de Rentas notificó de pago al Sr. Bermejillo, por conducto de los Administradores de las Haciendas de S. Vicente y Chiconcuac, librando despues en 25 de Noviembre, el mandamiento de ejecucion, que quedó practicado el 26.

Por último, por vía de prueba de la misma parte del Sr. Bermejillo, se pidieron, copia certificada de la escritura de 1º de Abril de 1853, otorgada por Dª Josefina Eguía y su esposo D. Anacleto Polidura, que fija á las Haciendas mencionadas un valor de \$340,359 57½ centavos, y testimonio al Juzgado 1º de Distrito de la Capital y al Ministerio de Hacienda, de las constancias de los expedientes que formaron sobre ese asunto, y que allí señaló la misma parte del quejoso. Por esos testimonios que que como instrumentos auténticos hacen plena prueba, consta que el Juzgado de Distrito de la Capital pronunció en 24 de Febrero de 1853, una sentencia en el juicio seguido entre el denunciante Lic. D. Nabor Ruiz, la testamentaria de D. Miguel Ajuria á quien se habían vendido ó prometido vender las Haciendas referidas, y el Promotor fiscal, por la que se declaró que no había habido traslación de dominio, ni se causaron por consiguiente las alcabalas; que en 3 de Agosto de 1859, el Tribunal Superior de Hacienda mandó que se oyese á Polidura, y abierto nuevo juicio en 30 de Junio de 1860, se pronunció nueva sentencia que condenó á Polidura al pago de las alcabalas; que admitida por auto de 3 de Setiembre, en solo el efecto devolutivo, la apelación que contra esa sentencia interpuso el mismo Sr. Polidura, se sustanció un artículo relativo á la ejecución previa de ese fallo, y en 22 de Octubre de 1861, de conformidad con lo pedido por el Ministerio fiscal, se declaró que Polidura debía pagar solo \$11,985 73 centavos por la alcabala en que se le había condenado; que en 1865 se pronunció nuevo auto, mandando que se ampliara la ejecución á las haciendas, y se fijó entonces la alcabala en \$99,881 12 centavos; que en 3 de Abril de 1869 se exigió al Sr. Bermejillo que rindiera cuentas como depositario que se le había constituido de las Haciendas cuando fueron embargadas; que sustanciado un artículo entre este Sr. y el denunciante y el Promotor fiscal,

se resolvió por auto de 16 de Octubre de 1869 que rindiese cuenta de la depositaría ó pagara \$11,985 13½ centavos; y por último que celebrada la transacción de 17 de Mayo de 1870, se desistió el Lic. Pastor, apoderado del denunciante, y en 2 de Julio de 1870, se le hubo por desistido de los derechos que por la denuncia pudiera hacer valer en juicio. Consta por otra parte, que transcrito al Ministerio de Hacienda el curso del nuevo denunciante D. Pedro Bueno, de 18 de Noviembre de 1868, relativo á que por el Gobierno del Estado de México se pidiera la remisión del expediente, se sustanció también un artículo en el Juzgado de Distrito que se resolvió por auto de 15 de Marzo de 1869, declarando, que no debía remitirse; por último, consta que el Lic. Pastor, representante del Lic. D. Nabor Ruiz, recibió en 30 de Marzo de 1870, \$3,500 por los derechos adquiridos en virtud de su denuncia, según convenio que celebró con el Gobierno general, y entre los muchos denunciantes del adeudo por alcabalas, aparece también D. Juan Basagoiti que en 25 de Marzo de 1870, otorgó poder á D. Francisco Azcárate para que lo representara en lo relativo á la denuncia que había hecho al Gobierno del Estado, y sustituido ese poder en 28 del mismo Marzo á D. Pedro Luinaga, este cedió por escritura de fecha 30 del mismo mes y año, al Supremo Gobierno de la República, todos los derechos y acciones adquiridos por aquella denuncia.

Todos esos datos reunidos y plenamente comprobados, han venido á esclarecer de una manera completa los hechos en que se apoya este recurso de amparo, y el Juzgado puede, por fin, con pleno conocimiento, decidir si el procedimiento reclamado viola ó no las garantías constitucionales. Examinemos pues, si se han infringido todas y cada una de las invocadas por el quejoso. El artículo 16 de la Constitución previene, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente para cobrar las alcabalas de que se trata, por que estas son materia de un asunto contencioso, no constituyen un adeudo indudable, y por consiguiente no procedia respecto de ellas el uso de la facultad económico-coactiva, que malamente aplicó la autoridad ejecutora. Se violó por consiguiente esa garantía constitucional; y ademas, admitiendo que el acuerdo del Gobernador del Estado de 16 de Agosto último, se refiriese á la cobranza económico-coactiva, que desde luego intentó el Director de Rentas, tampoco el Gobernador es autoridad competente para decretar esa cobranza. Efectivamente, el cobro importaba la resolucion de hecho, de los derechos en pugna que la Federacion y el Estado pretenden tener para el cobro de las alcabalas; importaba la declaracion de nulidad de la transaccion celebrada entre el Sr. Bermejillo y el Gobierno general, y obligaba á este Sr. á verificar segunda vez el pago que ya había hecho y fué aceptado por el Gobierno general.

El quejoso pretende tambien que con ese procedimiento se violó la garantía del artículo 17 en la parte que previene que los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia; pero en concepto del que suscribe, no existe tal violacion, puesto que el quejoso no ha ocurrido á los tribunales antes de promover este recurso, contra el procedimiento que reclama. No obstante, el mismo artículo previene, que nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho, y es incuestionable violencia el uso de una facultad no concedida para el cobro, y mucho mayor y absolutamente injustificada, la prohibicion de trabajar en los términos que aparece de la carta de fojas 77. El objeto de este último procedimiento fué, como lo he repetido en mis anteriores peticiones, poner al quejoso en la disyuntiva de pagar el adeudo que no reconoce, ó perder con la paralización de los trabajos de las Haciendas una cantidad mucho ma-

yor, y en mi opinion ese arbitrio que no es ni puede ser legal, es una violencia inconcusamente prohibida por el artículo á que me refiero.

El artículo 20 fraccion 5ª previene, que en todo juicio criminal, el acusado tendrá la garantía de que se le oiga en defensa; y como en nuestro caso no ha habido tal juicio, creo que tampoco puede decirse violada esa garantía. Sin embargo, dice el quejoso, que las multas que cobra la Direccion, son penas que la ley establece para la defraudacion de alcabalas; y como la averiguacion de ese delito y la condenacion en esas penas, debe hacerse en juicio criminal, se han salvado en el procedimiento de la Direccion, esa garantía, como todos los requisitos establecidos para los juicios; pero aun en ese concepto, las multas fueron impuestas al causante, y solo se cobran al Sr. Bermejillo en virtud de la hipoteca que se pretende reportan sus fincas, y por consiguiente al antiguo, es decir, al causante de las alcabalas sería al que competiera el goce de esa garantía, pero no al Sr. Bermejillo.

El artículo 21 dice: "La aplicacion de penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial. La política ó administrativa, solo podrá imponer como correccion hasta quinientos pesos de multa, ó hasta un mes de reclusion en los casos y modo que expresamente determine la ley." En nuestro caso tenemos comprobado, que la multa que se cobra al Sr. Bermejillo, como exceso en la computacion de las alcabalas, aplicando el artículo 12 de la ley de 31 de Mayo de 1851, asciende á \$175,986 78 centavos, y el Director de rentas que hizo la computacion y cobra esa multa, es una autoridad administrativa. Es indudable que esa prevencion constitucional quiso garantizar un juicio en forma, con los requisitos de defensa y demas que trae consigo la decision de los tribunales competentes, para el caso en que hubiere de imponerse una pena mayor que las que designa el artículo, y por consiguiente en el procedimiento reclamado

por el Sr. Bermejillo, se violó esa garantía puesto que se aplicó la multa referida, por el Director general de Rentas.

El artículo 22 prohibió para siempre las multas excesivas, y la de \$175,986 78 centavos, es excesiva por su cuantía y por la desproporcion que tiene en ocho tantos con el adeudo por cuya falta de pago se impone.

El artículo 27 previene, que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización; y como en el caso que ahora examinamos no ha habido ni se pretende hacer expropiacion por causa de utilidad pública, es tambien en mi concepto inaplicable este artículo.

Este amparo fué promovido tambien, por que con el procedimiento reclamado invade la Direccion de Rentas la esfera de la autoridad federal; y efectivamente, el artículo 98 de la misma Constitucion, establece que pertenece á la Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro y de aquellas en que la Union fuere parte. En el caso de que nos ocupamos la controversia estaba iniciada con anterioridad á la intervencion de las autoridades de Morelos; en este asunto el Gobierno general ha sostenido siempre sus exclusivos derechos á las alcabalas, objeto del cobro, y por la transaccion de 1870 las dió por total mente pagadas, comprometiéndose á que se entendería con las autoridades de los Estados, en el caso de nueva reclamacion por su parte, y por consiguiente, si el Estado de Morelos cree que puede sostener sus derechos á las alcabalas, debe ocurrir á la Suprema Corte de Justicia, y salvando su decision, no reconociendo su competencia, ó decidiendo por sí en negocio del resorte de aquel Supremo Tribunal, invade sus atribuciones, y procede por ese nuevo motivo el amparo que solicita.

Ademas, dividido el antiguo Estado de México entre el actual y los de Hidalgo y Morelos, el credito por las alcabalas pte-

TOMO VI.—PARTE II.

neceria á los tres, en el caso que no fuera de la Federacion, y establecido por el artículo 94 fraccion 5 de la Constitucion, que corresponde á los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten entre un Estado y uno ó mas vecinos de otro, los Estados de México é Hidalgo deben ocurrir á los tribunales federales para su cobranza contra el Sr. Bermejillo, que es vecino de la Capital de la República y propietario de las Haciendas, por cuya venta se dicen causadas las alcabalas, que están ubicadas en el territorio del Estado de Morelos. No hay en este juicio dato alguno que compruebe el acuerdo de esos Estados para hacer reunidos la cobranza de ese crédito; pero en todo caso, concedida á la autoridad ejecutora la facultad de cobrar únicamente los créditos del Estado, y limitado el uso de la facultad coactiva á solo esos créditos, el Director de Rentas ni debia aplicarla en lo que corresponde á los Estados de México é Hidalgo, y extralimitó sus atribuciones, cobrando adeudo que no pertenece exclusivamente al de Morelos.

Por lo que, el Promotor fiscal pide se declare: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Pio Bermejillo, contra la invasion que el Director general de Rentas del Estado hace en la esfera de la autoridad federal, con el procedimiento reclamado; que protege y ampara al mismo Sr. en el goce de las garantías que otorgan los artículos 16 y 17 de la Constitucion violadas con el cobro de las alcabalas, y en el goce tambien de las garantías que otorgan los artículos 21 y 22 violadas con la aplicacion de las multas que tambien se le cobran.

Cuernavaca, Enero 16 de 1874.—*Nicolas Medina*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Enero 23 de 1874.—*Mariano Sansalvador*.

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Cuernavaca, Enero 20 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Francisco Cagigal a nombre y en representacion de D. Pío Bermejillo, por decir haberse violado en la persona de este las garantías que la Constitucion otorga en sus artículos 16, 17 y 20 fraccion 5ª, 21, 22, 27 y 28, con el embargo que de sus haciendas San Vicente, Dolores y Chiconcuac, le ha hecho la Direccion de Rentas del Estado á nombre del mismo y de acuerdo con el comisionado de los de México é Hidalgo, por el cobro que se le hace del derecho de traslacion de dominio causado en la venta y retroventa de dichas haciendas, verificadas en Octubre de 51 y Noviembre de 52, multa del no pago y gastos de cobranza, cuyo total monto asciende á la gruesa cantidad de doscientos doce mil doscientos sesenta y cuatro pesos treinta y nueve centavos (\$212,264. 39 cs). Visto el auto de este Juzgado, de 4 de Diciembre último, por el que se mandó suspender el acto reclamado, que era el del embargo, y se previno á la oficina ejecutora dejase en libertad á Bermejillo para disponer en sus fincas lo conveniente á precever los daños que de la suspension de sus labores se le seguirían; el requerimiento para que se cumpliera esa determinacion y el acatamiento á ella por el Superior Gobierno del Estado. Visto el informe con justificacion de la autoridad responsable; lo pedido por el C. Promotor; las pruebas rendidas por la parte de Bermejillo; el alegato fiscal y no el de Bermejillo, que su apoderado dice lo presentará en México (fojas 113 vuelta).

Resultando: que por sentencia de 30 de Junio de 1860, se declaró haber sido real y verdadero contrato de venta, y no de promesa de ella, el escriturado en 30 de Octubre de 1851, respecto de las haciendas San Vicente, Dolores y Chiconcuac, y haber causado y deber cobrarse por lo mismo, el impuesto sobre traslacion de dominio, conforme á la ley del Estado de México de 31 de Mayo

de dicho año de 51 (fojas 126 vuelta á 129 vuelta); que apelada esta sentencia (en la que nada se dijo de multa, ni se declaró fraudulento el no pago del impuesto que hasta entonces se ventilaba en juicio), solo se admitió el recurso en el efecto devolutivo, mandando se ejecutase la sentencia (fojas 130).

Que despues, á gestion de parte, y con audiencia fiscal se declaró que solo se debía cobrar la alcabala y no la multa, importando aquella once mil novecientos ochenta y cinco pesos setenta y tres y medio centavos, por cuya cantidad fué embargada la casa número 15 de la Rivera de San Cosme (fojas 132 vuelta).

Que posteriormente se dijo de nulidad de esta aclaracion, y se pidió y mandó que mejorando la ejecucion, el cobro se hiciese por noventa y nueve mil ochocientos ochenta y un pesos doce centavos por alcabala y multa, reembargándose al efecto, como se reembargó, la casa secuestrada, y ampliándose el embargo sobre las haciendas, materia del contrato, de las que se nombró depositario á D. Pío Bermejillo que ya entonces era dueño de ella (fojas 133 á 136); teniendo de particular este embargo, á diferencia del verificado en 3 de Febrero de 65, (fojas 135) que para permitir la continuacion de las labores y el uso de tierras, instrumentos y máquinas, exijía la Direccion se le pagásen los alquileres de ellas (fojas 58), por lo que Bermejillo ocurrió promoviendo este juicio.

Resultando: que ha habido varios denunciante de las alcabalas debidas á que se decian deberse, y el primero, Lic. D. Nabor Ruiz, siguió juicio sobre ello, ante el Juzgado de Distrito de México, cuyo éxito final vino á ser, que al representante de su testamentaria Lic. D. Juan N. Pastor, se le entregaron tres mil quinientos pesos, en la transaccion de que se hablará despues, celebrada entre Bermejillo y el Supremo Gobierno.

Que el último denunciante, Lic. D. Pedro Ruano, dijo al Gobierno del Estado de Mé-

xico, pertenecer á su Erario esas alcabalas y multas, por haberse causado por fincas situadas en su territorio y con arreglo á una ley del Estado, de 31 de Mayo de 1851, vigente al tiempo de la venta y retroventa de tales fincas.

Que en virtud de este denuncia, pidió ese Gobierno al de la Union, ordenáse al Juez de Distrito de México la remision de los autos al del Estado, para su secuela, lo que el de la Union mandó se hiciese, si no pulsaba en ello inconveniente legal el referido Juez federal, quien oyendo sobre esto á D. Miguel Garduño que gestionaba entonces con Bermejillo sobre el pago de las alcabalas, y al representante del Fisco, no remitió los autos, sino que continuó conociendo de ellos creyéndose competente, sin que ningun Juez del Estado de México le iniciase sobre esto competencia.

Que estrechado mas adelante Bermejillo, para que rindiése cuenta justificada de su depositaria á fin de cubrir de los productos de las fincas, únicamente por de pronto los once mil novecientos ochenta y cinco pesos cuarenta y tres y medio centavos, que primitivamente se mandaron cobrar por las alcabalas, y no los noventa y nueve mil y pico, por los que aquellas fueron embargadas como por tal mandato del Juez que se tuvo por competente, parece que creyó Bermejillo tener que considerar este asunto propio de la Federacion, cualesquiera que acerca de ello fuesen sus opiniones particulares, en lo que acaso fundado, celebró con el Supremo Gobierno, transaccion respecto del pago de esos adeudos, la que le fué admitida en los términos que en ella constan (fojas 150 á 152), haciéndose dicho Gobierno responsable de las reclamaciones que sobre esto pudieran presentarse, condenando á Bermejillo cuanto por razon de multas pudiera deber, y declarando á sus fincas libres de toda responsabilidad.

Que esa transaccion comunicada al Juzgado de Distrito, fué aprobada por este, dando con ello por terminada, respecto de

Bermejillo, la ejecucion de la sentencia de 30 de Junio de 1860 sobre el pago de las alcabalas (fojas 153 á 156) levantando el depósito y de consiguiente, el embargo de las haciendas.

Que no obstante esto, el Estado de Morelos, de acuerdo con el Comisionado de los Estados de México é Hidalgo, le mandó embargar sus fincas á Bermejillo por el total adeudo de doscientos doce mil doscientos sesenta y cuatro pesos treinta y nueve centavos, no pasando por la transaccion referida, como celebrada con quien ningun derecho tenia á esos créditos por pertenecer á los Estados mencionados, en concepto de la autoridad que ha informado.

Que examinadas las garantías que se dicen violadas, pretende la Direccion estar en su derecho, al haber decretado y ejecutado el embargo de las haciendas, porque habiéndose verificado la venta y retroventa de ellas, cuando estaba vigente la ley del Estado de México de 31 de Mayo de 51 por la que se fijaba su cuota y las penas en que se incurría no pagando, es claro para esa oficina, que al Estado de México correspondieron esas alcabalas; y aunque por los posteriores cambios políticos, y consiguiente diversidad de leyes, unas veces ha podido cobrarlas aquel Estado y otras el Gobierno general, no habiéndolo verificado este en las épocas en que legalmente pudo hacerlo, en la presente no le pertenecen, por haber vuelto las cosas al estado primitivo, en que tales impuestos son como fueron antes, rentas de los Estados; por lo que al embargar las fincas, no se ha infringido el artículo 16 ni violado la garantía que otorga. A lo que contesta Bermejillo, que fundado el Gobierno general en leyes que le favorecen, con pleno conocimiento de sus derechos celebró la transaccion de que se ha dado conocimiento al Estado de Morelos, por lo que declaró libres de toda responsabilidad las indicadas haciendas, dispuesto como está á contestar reclamaciones que surjan sobre ellas; por lo que al embargarlas la Direc-



ción, le vulnera la garantía mencionada.

Considerando acerca de esto: que á la Justicia federal no le toca examinar ni decidir, sobre si el Gobierno de la Union pudo ó no legalmente celebrar esa transacción, ni si á él ó á los Estados en que el de México está fraccionado, corresponden los impuestos que se disfrutaban; pues basta saber que esta cuestión existe, para que las cosas se mantengan como estaban antes del embargo, motivo de este juicio, hasta que la decida la autoridad competente. En cuyo caso, siendo las partes litigantes, de un lado los Estados de México ó Hidalgo y Morelos, y del otro el Gobierno general, ni aquellos, ni este como partes, pueden embargar la cosa litigiosa, sin que el privilegio del Fisco para no litigar despojado, pueda autorizar el secuestro, por ser también principio de derecho, que un privilegiado contra otro de igual clase, no goza de su privilegio; y al reconocer el Estado de Morelos como su Juez sobre esa cuestión incluíble á la Suprema Corte de Justicia, el mismo Estado y sus anexos en la litis, reconocen ser parte y no Juez; por lo que al decretar y ejecutar el embargo, violaron el artículo 16. Y es visto ser incluíble esa cuestión, porque previniendo el artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1837, que nacida contienda en embargo coactivo, se pasen inmediatamente las diligencias practicadas al Juez de Hacienda respectivo; siéndolo la Corte Suprema sobre la validéz ó nulidad de la transacción con que resiste el embargo Bermejillo, inevitable es ocurrir á ese Supremo Tribunal, como lo reconoce el mismo Estado de Morelos.

El artículo 17 en lo conducente dice: *nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho.* Y siendo el apremio para el cobro, uno de los medios de violencia y mucho mas si se ejerce con el rigor que para las mencionadas fincas se decretó; pues no solo se cobraban alquileres por el uso de máquinas, instrumentos y tierras, sino que las instrucciones del depositario eran segun

su carta de fajas 77: *que se paralizasen absolutamente todos los trabajos en el campo y fincas, la reparación en maquinaria y edificios y hasta el regalio y todo lo que fuere; el apremio no podia ser mayor, ya fuese para obtener por esos medios los alquileres, ó ya para inclinar al dueño de las fincas á una transacción sobre los adeudos que se le reclamaban.*

Mas como de tales apremios solo las autoridades, y acaso ni estas con ese rigor, pueden usar para las cobranzas fiscales ó de particulares, siendo los tres Estados dichos parte en el litigio que ante la Suprema Corte de Justicia debe ventilarse, no han podido en calidad de parte y parte no privilegiada, por tener que disputar contra otra parte igualmente privilegiada, ejercer el apremio, reservado á los jueces; y por lo mismo, se ha infringido con él la garantía del artículo 17, por haber habido para el cobro positiva violencia.

El artículo 20 fraccion 53, manda: *que se le oiga en defensa (el acusado), por sí ó por persona de su confianza ó por ambos, segun su voluntad.* La Direccion expone: *no se trata aquí de causa criminal, nada acusa de delito á D. Pio Bermejillo, á quien solo se le dice que pague lo que debe, y esto sin que se le niegue el acceso á los tribunales, para que se le oiga sobre esa reclamacion, por cuyas dos consideraciones no existe la violacion de que se queja.* Bermejillo dice: *idóntamente me acusan de fraude ó conato de fraude al Erario, cuando me cobran las multas con que la ley castiga este delito, y me las impones sin que Juez alguno me haya declarado incurso en ellas.*

Sobre este punto hay que considerar, que á estar la Direccion expedita, como no ha estado por lo ya dicho, para embargar á Bermejillo por el cobro que le hace, mientras del embargo no pasara al remate, sin cumplir antes con el artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1837 y 32 de la de 20 de Noviembre de 1838, no se podria afirmar que *inaudita parte remataba*; pues la facultad

coactiva lo autorizaba para embargar hasta por los recargos, y haciéndolo y acudiendo al Juez sin pasar adelante, para que dicha autoridad los impusiese, no cometía violación. Pero como su privilegio de embargar cesa en este asunto, por tener que contener con el Supremo Gobierno, comete la falta, embargando, que un particular cometería si por sí embargase á su deudor, en cuyo caso infringiría el artículo 17 citado y el final del artículo 14 de la Constitución general.

La garantía del artículo 21 que dice: *La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial*, la viola en Bermejillo la Dirección, exigiéndole sin acudir al Juez para que lo decretó, el pago por vía de multa, de los recargos que le reclama; pues tales recargos son pena propiamente dicha, cuya aplicación es del resorte de la autoridad judicial y hasta que esta la decretase, no podría la Dirección exigirlos, resistiéndolo Bermejillo, tanto mas cuanto que no está decidido si es nula ó válida la condonación que de esos recargos le hizo el Supremo Gobierno en la transacción que celebraron, y cuanto que si se consideran como rezagos, no puede la Dirección extender las cobranzas de ellos mas atrás de 1861, hasta cuyo año le permite un decreto del Estado (de 19 de Diciembre de 1871) retrover para la liquidación de esos adeudos. En cuya ley se prohibe cobrar los créditos correspondientes á la época del llamado Imperio, y precisamente en esa época (30 de Enero de 1865), fué cuando se decretó el cobro de los noventa y nueve mil pesos en que estaban incluidos los recargos, por los que se amplió la ejecución hasta embargar por ellos las haciendas (fojas 134 vuelta á 136). Se violan pues, los artículos 21 y 14 de la Constitución.

Respecto de la multa excesiva que en el artículo 22 se prohíbe, la Dirección dice: *lo excesivo de una multa es relativo, y aun cuando lo fuera el veintidos por ciento, que impone el artículo 13 de la ley del Estado*

*de México de 31 de Mayo de 1851, esa disposición debe observarse por ser anterior á la Constitución de 1857, cuya ley por su prelación que sea como en efecto lo es, prohíbe ella misma en su artículo 14, que se le dé un efecto retroactivo; al aplicar pues esa multa por grande que ella sea, no se viola por esto ninguna garantía. Bermejillo dice en cuanto al exceso: una multa de ciento setenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos que importan mas de siete tantos, el adeudo evidentemente es excesivo; y en cuanto á la retroactividad añade el Promotor: en lo penal, la práctica demuestra que una ley posterior de pena mas benigna, se aplica á un hecho que por ley anterior debería ser penado con mayor rigor, y en su apoyo cita á Escribano, Efecto retroactivo, párrafo 29 número 9.*

Considerando sobre esto: que aunque los jueces no deben juzgar de las leyes, sino segun las leyes, la Justicia federal, como excepcion de ese principio, tiene que juzgar muchas veces de las mismas leyes, segun es de verse en multitud de fallos de esta especie; y que en uno que tiene mucha analogía con el presente, el Juez federal examinó, si la multa impuesta por el artículo 13 de la ley de 31 de Mayo de 1851 es ó no excesiva, sobre lo que consideró: "primero: que aunque no está reglamentado todavía el citado artículo 22, ni hay ley alguna que determine que multas deben tenerse por excesivas, los tribunales federales tienen que resolver sobre el cumplimiento y aplicación de aquel precepto fundamental, si no ha de ser letra muerta ni una quimera la garantía que otorga; segundo: que si se reflexiona que las penas deben ser proporcionadas á los delitos, que no hay mas regla para graduar esta proporción que la justicia universal y la conciencia humana (Pacheco, der. pen. loc. XIV), manifestada por la opinion pública; que esta debe buscarse principalmente en los escritos de los autores y en el espíritu mismo de la legislación vigente, para delitos de la propia naturaleza; que no solo no exis-



te ningun escritor moderno que asigne la pena de derechos octuplos, á la defraudacion de la alcabala que causa la venta de bienes raices, sino que algunos por el contrario, refieren que la opinion pública está ya declarada en contra de los derechos quíntuplos y demas señalados á los delitos de defraudacion, (Escribhe, de leg. artículos "Contrabando" y "Defraudacion"); que la legislacion de hacienda vigente en el Estado, ha derogado las leyes antiguas, por el rigor excesivo de sus penas, imponiendo solo á los defraudadores de las rentas públicas, la de pagar derechos dobles; que reflexionando pues en cuanto se ha dicho, es inconcuso que la multa impuesta por el artículo 12 de la mencionada ley de 31 de Mayo, es excesiva; tercero: que si la confiscacion se verifica no solo en todos los bienes de un individuo sino en su mayor parte (Sala, ilustrac. al decr. lib. II. tít. XXX. párr. 19. Gutierrez, Prac. crim. discurso sobre los delitos y penas, cap. 6 párr. 101,) es evidente que serán multas excesivas las que comprenden la mitad de los bienes, ó una parte considerable de ellos, como lo es sin duda la de \$27,696.38 cs. que se cobra al C. José Elías Fagoaga. Considerando respecto del segundo punto; primero: que ninguna providencia coactiva tiene lugar, cuando los derechos del Fisco no son claros ó indudables, lo que sucede especialmente, cuando por razon de la cuota que se cobra ó por la *variacion del tiempo y otras circunstancias*, se duda con fundamento de la aplicacion de la ley al caso particular, artículos 2º y 3º de la ley de 20 de Enero de 1837, ejecutoria de la Suprema Corte de 11 de Marzo de 1871; segundo: que por las razones expuestas hasta aquí, y principalmente por el hecho de haber consultado tanto el Gobierno constitucional del C. Tagle, como el de su sucesor, á la Legislatura del Estado, la aclaracion de la citada ley de 31 de Mayo, que estableció la multa que se cobra, es bien fundada la duda de la aplicacion de dicha ley, al caso de Fagoaga.....'

(Semanario Judicial tom. 3º pág. 117.)

Que la facultad coactiva no procede, sino cuando los derechos del Fisco son claros ó indudables; y no siéndolo los de que se trata, por la indeclinable cuestion mencionada, se infringe con su ejercicio el artículo 3º de la citada ley general de 20 de Enero de 37 vigente en toda la República.

Que estas consideraciones se aumentan, con la ciencia que el Juez que suscribe tiene de haberse dado, cuando cayó el llamado Imperio, la ley que antes se cita (y él aplicó como Juez en el Estado de México) para castigar los fraudes al Erario, con *solo el duplo* de su monto, derogando una ley de la época precedente, en que tal defraudacion se mandaba castigar con un mes de prision y el *diez tanto* del adeudo: y si este décuplo pareció excesivo al legislador, y por eso lo derogó, con mas razon debe entenderse derogada la pena del veintidos y medio por ciento de recargo y seis y medio de cobranza, que es lo que se le cobia á D. Pío Bernicillo.

Que todavía adquiere mayor fuerza el considerando anterior, con la última disposicion general de 11 de Diciembre de 1871, en cuyo artículo 3º se ordena que *el recargo contra los causantes ó deudores al fisco, no exceda del diez por ciento de la cantidad total del adeudo*. De todo lo cual se deduce deberse reputar por excesivos el recargo y gastos de cobranza que se reclaman al quejoso, y que con ello se le vulnera la garantía del artículo 22.

Que es de considerarse á mas de lo dicho, que se le ha embargado á nombre de los tres Estados, Morelos, México é Hidalgo, sin que conste en el expediente ni en los comprobantes acompañados al informe de la Direccion, la autorizacion bastante que para embargar á nombre del segundo y tercero se le haya delegado; pues solo dice oír de acuerdo con el comisionado de dichos Estados, lo que en autos no es bastante para justificar su procedimiento, con el que tambien bajo este aspecto ha violado la garantía del artículo 16.

Considerando por último: que el 27 no se ha infringido; pues no se trata ni se ha tratado de privar á D. Pío Bermejillo de su propiedad, sino de cobrarle impuestos que se ha creído que debe, cuya contienda debe decidirse por la Suprema Corte de Justicia segun el artículo 98 de la misma Constitución federal, artículo que hasta ahora tampoco se ha infringido; pues que no se ha acudido para su conocimiento á ningun otro Tribunal, y si la Direccion embargó, lo hizo en la creencia de disfrutar en este asunto de naturaleza extraordinaria, la facultad coactiva que tiene en las cobranzas comunes del Fisco; por todo lo cual, se declara con presencia del artículo 1º fraccion 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869 y de los artículos 101 y 102 de la expresada Constitución.

Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Pío Bermejillo, porque con el embargo de sus haciendas San Vicente, Dolores y Chiconcuac, se han violado en su persona las garantías de los artículos constitucionales 14, 16, 17, 21 y 22.

Segundo: la misma Justicia no lo ampara por las garantías de los artículos 20 fraccion 5ª, 27 y 98 de la misma Constitución.

Tercero: hágase saber al C. Promotor, y notifíquese al apoderado de D. Pío Bermejillo, previniéndole reponga el papel que deba reponerse.

Cuarto: publíquese este fallo en la forma acostumbrada, y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo proveyó y firmó el C. Lic. Mariano Sansalvador Juez interino de Distrito del Estado de Morelos, actuando con testigos de asistencia por impedimento accidental del secretario. Doy fé.—*Mariano Sansalvador.*—A.—*Carlos Orellana.*—A.—*Donaciano Rodríguez.*

Es copia que certifico. Cuernavaca, Enero 23 de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

### *Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el Director general de rentas del Estado, ha iniciado un recurso de amparo contra el acto de suspension dictada por el C. Ignacio Merelo, Juez 2º suplente de Distrito, en el amparo promovido por D. Pío Bermejillo contra la cobranza económico-coactiva que le hace la Direccion de Rentas, como dueño de las Haciendas de San Vicente, Dolores y Chiconcuac, de unas alcabalas que se dicen causadas por la venta de esas Haciendas en los años de 1851 y 1852, mas los recargos y multas en que se pretende haber incurrido el causante. El acto reclamado es por consiguiente una providencia dictada por autoridad judicial en uso de sus facultades, con el objeto de asegurar el juicio de los Tribunales federales en una controversia promovida ante ellos, y evitar que por la consumacion irremediable de los actos que motivaron esa controversia se impidiera su decision ó se irrogaran mientras esta se dictaba, perjuicios graves ó irreparables al quejoso. Esa providencia no admite mas recurso que el de responsabilidad conforme á la segunda parte del art. 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, y segun el art. 8º de la misma ley, el recurso de amparo no es admisible en negocios judiciales. Sin embargo, admitido el escrito del C. Director, por auto del día 11 del que cursa, se pidió al C. Merelo el informe prevenido por el art. 5º de 20 de Enero ya citada, y rendido ese informe que se limitó á hacer constar los hechos en que se apoya la queja, se mandaron pasar los autos al que suscribe para que pidiera conforme al artículo citado.

Limitándome pues al punto de suspension, debo advertir desde luego que ese artículo previene, que cuando el actor pidiera que se suspenda desde luego la ejecucion de la ley ó acto que lo agravia, el Juez previo informe de la autoridad ejecutora y trasla-

do al Promotor fiscal, que se evacuaran cada uno en veinticuatro horas ó con solo el escrito del actor cuando haya urgencia notoria, resolverá sobre dicha suspension. En nuestro caso, el C. Director no ha pedido la suspension del acto que reclama sino únicamente que se le ampare contra él, declarando que las cosas deben permanecer en el estado en que se encontraban cuando el C. Merelo dictó su auto de suspension, y por consiguiente no se ha provocado ni es necesaria previa resolucion sobre este punto; debiendo conforme al art. 9º de la ley, pedirse el informe con justificacion como trámite inmediato á la presentacion ó admision del recurso. La prevencion de este último artículo es terminante, pues dice: "Resuelto el punto sobre suspension inmediata del acto reclamado, ó desde luego si el actor no lo hubiere promovido, el Juez pedirá informe con justificacion etc."

No procedería pues el decreto de V. que suspendiese el acto reclamado en este recurso; pero además, esa determinacion tampoco sería fundada. Para ella sería indispensable computar los perjuicios que la falta de suspension causaria al C. Bermejillo, y las que origine al Estado el auto que la determinó; en todo caso habria el peligro de impedir ó hacer inutil la continuacion de un juicio pendiente, y el auto del C. Merelo no está sugeto á la revision de V.

Por otra parte, ese auto en nada perjudica al C. Lino Nava, y solo retarda para el Estado la coaccion para el pago de un crédito cuya cobranza está denunciada como anticonstitucional. Por lo que, el Promotor fiscal pide se declare no haber lugar á la suspension inmediata del acto reclamado en este recurso, y se pide al C. Juez 2º suplente el informe con justificacion prevenido por el art. 9º de la ley orgánica tantas veces citada!

Cuernavaca, Diciembre 15 de 1873.—  
N. Medina.

### *Segundo pedimento fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en 4 del que curso, el C. Francisco Cagigal en representacion de D. Pio Bermejillo, presentó escrito á este Juzgado quejándose de que la Direccion general de Rentas, habia procedido á embargar las Haciendas de San Vicente y Chiconcuac impidiendo sus trabajos, con el objeto de cobrar con la facultad económico coactiva la cantidad de doscientos doce mil doscientos cincuenta y cuatro pesos, treinta y nueve centavos (\$ 212,254.39 cs.) importe de las alenbalas, multas y recargos que se dicen causados por la venta de esas Haciendas en los años de 1851 y 1852, pidiendo se decretase desde luego la suspension inmediata de esa cobranza y del mandamiento á virtud del cual fueron embargadas las Haciendas, y se le ampara-se en definitiva en el goce de las garantías que otorgan los arts. 16, 17, 20 fraccion 5ª 21, 22, 27 y 98 de la Constitucion de la República, que violan esos procedimientos. En el mismo día, en atencion á la urgencia del caso, por los perjuicios que sobrevendrian á D. Pio Bermejillo de la paralización de las labores de las Haciendas de San Vicente y Chiconcuac, y conforme al segundo párrafo del art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, el C. Ignacio Merelo Juez 2º suplente, encargado del Juzgado por ausencia y enfermedad de V., decretó la suspension previniendo al C. Director de Rentas dejara al Sr. Bermejillo en libertad para disponer en las Haciendas lo conveniente á precaverse de los daños y perjuicios que le ocasionaría la paralización de los trabajos. Ese auto se notificó en la misma fecha al C. Director, y este presentó el día 10 un escrito, diciendo que el alto puesto que desempeña en el Estado no le permitia ver con indiferencia que manchara su soberanía una autoridad ignorante, y fundándose en la fraccion 2ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, pedía se con-

cediera amparo contra el auto de suspension dictado por el C. Merelo, declarando que las cosas debian permanecer en el estado que antes guardaban, porque la autorizacion para que el Sr. Bermejillo usara de las cosas embargadas equivalia á levantar en parte el embargo; y careciendo de facultades al efecto el C. Merelo, atacaba la soberania del Estado ingiriéndose en sus actos administrativos, mas allá de lo que permiten la Constitucion y las leyes.

En su informe con justificacion, el C. Juez 2º suplente dice: que la facultad económico-coactiva en la ley permitian al director de Rentas suspender los trabajos de las Haciendas, y usando de la facultad que concedió á los Jueces el art. 5º de la ley de 20 de Enero y teniendo presentes las fracciones 7 y 8 del art. 1020 del Código de procedimientos civiles, así como el art. 4º de la Constitucion de la República, creyó cumplir con su deber dictando el auto de suspension que ahora se reclama. El Código de procedimientos en la parte citada, previene: que están exceptuados de embargo los efectos necesarios para el fomento de las negociaciones industriales y las mieses y cosechas, mientras no estén limpios y entrojados los granos; el art. 4º de la Constitucion establece: que todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que le acomode, siendo útil y honesto y para aprovecharse de sus productos, sin que ni uno ni otro se le pueda impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolucion gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando ofenda los de la sociedad; y el art. 5º del formulario expedido en 31 de Diciembre de 1838, para el ejercicio de la facultad coactiva concedida por el decreto de 20 de Noviembre del mismo año, mandado observar en el Estado, previene que no deben embargarse los sembrados y barbechos, y solo se podían intervenir para que no se extraigan ó enagenen los frutos, entre tanto se limpien y guardan en las trojes.

TOMO VI.—PARTE II.

Por consiguiente, el C. Director de Rentas no debió embargar los útiles de labranza ni mucho menos impedir de una manera directa la continuacion de los trabajos en las Haciendas; pero prescindiendo de la legalidad de sus actos que seria materia de otro juicio, el acto que en este se reclama, es como dije en mi pedimento anterior, una providencia dictada por autoridad judicial en uso de sus facultades, con el objeto de asegurar la resolution de los tribunales federales en una controversia promovida ante ellos, ó impedir que durante el juicio se irrogaran perjuicios graves ó irreparables al quejoso. Bajo ese aspecto, el auto de suspension dictado por el C. Merelo, es á mi juicio perfectamente arreglado á la ley, y necesario en el recurso de amparo promovido por el Sr. Bermejillo.

Conforme á la segunda parte del art. 3º de la ley de 20 de Enero antes citada, el Juez puede suspender provisionalmente el acto emanado de la ley ó de una autoridad que se reclame en un juicio de amparo, y la suspension se decreta siempre que antes de la resolution definitiva del recurso, pueda consumarse de una manera irremisible el acto reclamado, ó irrogarse irreparables ó graves perjuicios al quejoso. La orden del Director de rentas que impedia los trabajos en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac, en el procedimiento reclamado por el Sr. Bermejillo, era un medio coactivo extraordinario ó ilegal, que tenia por único objeto poner á aquel Sr. en la disyuntiva de pagar un adeudo que cree ilegítimo, ó de perder el importe de la zafra que debia comenzar cuando se practicó el embargo y el de las siembras nuevamente emprendidas, sin que por ello resultara beneficio alguno para el erario del Estado. Esos perjuicios habrian sido quizá de mayor cuantía que el crédito que trataba de cobrar la Direccion, y ademas de que habria sido muy difícil que en sus circunstancias hubiera podido indemnizarlos el erario; eran graves por sí mismo, y de que se permitiera la continua-

ción de los trabajos, no resultaba ningún daño para el Estado. Por otra parte, de continuar el procedimiento coactivo, se habrían rematado las haciendas embargadas al Sr. Bermejillo, y quedaría inútil la concesión del amparo solicitado, que no podía extenderse hasta la declaración de nulidad de la venta. Pero el C. Director funda su queja, en que las facultades de los jueces de Distrito no pueden extenderse hasta deshacer lo que ya se hubiere practicado, y solo pueden, por medio de la suspensión, impedir que se vaya adelante en el procedimiento reclamado; y al extralimitar el C. Merelo sus facultades, atentó á la soberanía del Estado, que no tiene mas límites que los marcados por la Constitución de la República y por las leyes orgánicas.

El artículo 6º de la repetida ley de 20 de Enero, establece que la suspensión podrá dictarse en cualquiera de los casos que marca el art. 1º, y por consiguiente pudo decretarse en el amparo del Sr. Bermejillo; y precisamente por que la suspensión debe impedir que se lleve adelante el procedimiento reclamado, debía levantarse también ó suspenderse la orden que impedía la continuación de los trabajos en las haciendas embargadas. No es verdad que la autorización para que el Sr. Bermejillo continuara los trabajos de esas haciendas equivalga á levantar en parte el embargo, sino que suspendidos los procedimientos coactivos, debía suspenderse también la prohibición de continuar aquellas labores, que fué uno de los medios de coacción empleados por el C. Director. El C. Merelo no extralimitó por consiguiente sus facultades, y obrando conforme á la ley orgánica de los arts. 101 y 102 de la Constitución, no ha restringido ni vulnerado la Soberanía del Estado.

El C. Director no designa en su escrito cual sea la facultad que vulnere ó restrinja el auto que reclama, sino que dice en general, que cualquiera autoridad que se ingiera en los actos administrativos de un Estado, mas allá de lo que permiten la Cons-

titución y las leyes, viola la autonomía de que reviste á los Estados el mismo Código fundamental; y ya hemos visto que el C. Director no tenía facultades para embargar los sembrados, que podía solo intervenir, y esa intervención no se la levantado ni impedido; que con arreglo á la ley de 20 de Enero podía el C. Merelo suspender ese como cualquiera otro procedimiento de las autoridades del Estado, y además, es notorio que la suspensión del uso de una facultad, decretada por una providencia judicial meramente provisional y precautoria, no restringe ni vulnera la independencia de las autoridades de los Estados, en los términos que la establece el pacto federal.

No procedería, pues, el amparo ni podría protegerse al Estado, contra ataques que nadie ha dirigido á su Soberanía; además, el art. 8º de la ley orgánica tantas veces citada, establece que no es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales, y la parte final del art. 6º de la misma ley, previene que contra la resolución de los jueces de Distrito sobre el punto de suspensión, no cabe otro recurso que el de responsabilidad.

La ley de 30 de Noviembre de 1861, establecía que podía pedirse amparo contra los actos de un Juez de Distrito ocurriendo á su respectivo suplente; y consultando el Ejecutivo de la Unión la innovación de que contra esos actos no cupiera otro recurso que el de responsabilidad, espónia en la iniciativa que dirigió al Congreso de la Unión en 30 de Octubre de 1868, (y que corre impresa en el número 314 del tomo 2º del "Diario Oficial" del Supremo Gobierno, correspondiente al 9 de Noviembre del mismo año, con el proyecto de ley que discutido y aprobado se promulgó el 20 de Enero de 1869,) las siguientes razones que son concluyentes y manifiestan el ánimo del legislador. "Contra los actos de un tribunal de la Federación no hay recurso de amparo, sino solo el de responsabilidad cuando se agoten los demás que franquen las leyes.

Así lo consulta el proyecto, y esta es una consecuencia natural de los principios adoptados. Los juicios de amparo se han establecido con el solo objeto de que los tribunales de la Federación conozcan de ciertas controversias relativas á la Constitución, y cuya resolución les corresponde conforme al art. 101. Si, pues, una de esas controversias ocurre ante un juez federal por uno de sus actos, lo natural es que el mismo la decida sin necesidad de un juicio aparte ante otro juez de la propia línea, sino quedando solamente sujeta á la revisión de sus superiores conforme á las leyes.....La verdad es, que no hay razón para proceder en juicio de amparo por un acto de un tribunal de la Federación, y no por los de otros del mismo género, ni la hay tampoco para seguir ese procedimiento especial, cuando la controversia está ya incidentalmente sometida al tribunal que la Constitución designa." Y sin embargo de que las comisiones encargadas de dictaminar sobre ese proyecto, consultaron que la jurisdicción de los jueces de Distrito debía ampliarse hasta revocar su sentencia suspensiva del acto reclamado, cuando en la instrucción encontrara datos que lo convencieran de que así debía hacerlo, y propusieron que contra esa resolución fuesen admisibles los recursos de revocación por contrario imperio y de responsabilidad, el Congreso aprobó la innovación iniciada por el Ejecutivo, y quedó establecido por la segunda parte del art. 69 de la ley de 20 de Enero de 1869, que el auto de suspensión no pudiera revocarse.

Por otra parte, conforme al art. 102 de la Constitución, la sentencia en los juicios de amparo debe limitarse á proteger á los individuos en particular, y por consiguiente solo los particulares agraviados pueden ser amparados. El auto de que nos ocupamos no infiere agravio alguno al C. Lino Nava en sus derechos particulares; y como el mismo art. 102 de la Constitución, los juicios de amparo solo pueden seguirse á petición

de la parte agraviada, y el C. Lino Nava no es el representante del Estado de Morelos para iniciar controversias judiciales, no está en las atribuciones de su empleo subalterno en el Ejecutivo del Estado, reclamar las violaciones de la Soberanía del mismo, y en sus derechos ó intereses particulares y legítimos, no sufre menoscabo ni perjuicio alguno con el acto que reclama; el presente recurso no solo es temerario é improcedente, sino que los improprios que se dirigen en el escrito de queja al C. Juez 2º suplente, son injustificados y gratuitos.

Por lo que, el Promotor fiscal pido, que se deniegue el amparo y se condene al C. Lino Nava al pago de una multa que no baje de cien pesos, conforme al art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Otrosí digo: que debe mandarse reponer con el correspondiente, el papel del sello 5º que se ha empleado en estas actuaciones.

Cuernavaca, Diciembre 30 de 1873.—  
*N. Medina.* Una rúbrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Enero 23 de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Cuernavaca, Enero 8 de 1874.—Vistas las anteriores diligencias que deben considerarse como un simple incidente del juicio principal de amparo promovido por D. Pio Bermejillo contra la Dirección general de rentas del Estado, por exacer violadas sus garantías con el embargo hecho por esa oficina, de las Haciendas de San Vicente, Dolores y Chiconcuac, y suspensión de sus labores, y no como un nuevo juicio de amparo, que no procede, pues ni por la ley ni por la práctica se han admitido, ni deben admitirse juicios de amparo contra otros juicios de amparo, lo cual daría un resultado funesto en la administración de la justicia Federal, enervando los segundos, entorpeciendo ó nulificando las providencias dictadas en los primeros, dando cavidad á



multitud de chicanas foroneas é introduciéndose en dichos juicios la confusion y el desorden, para evitar lo cual, la ley no ha querido que haya contra dichas providencias otro recurso que el de responsabilidad del Juez que las haya dictado. Por lo que el ocursó de la Direccion de rentas en que pedía se declarase "que las cosas debían permanecer en el estado en que se encontraban cuando el Juez 2º suplente dictó su auto suspensivo," cuyo estado era el de el embargo de las haciendas, y de sus instrumentos y útiles de labranza con la consiguiente paralización de las referidas labores, equivalía á pedir se nulificase el auto suspensivo en cuanto á los importantes efectos de muy fatal trascendencia consiguientes al embargo de los instrumentos, lo que se decretó no poder hacerse, pues ni por contrario imperio puede un Juez federal revocar su auto en que haya concedido ó negado la suspension.

Atendida por lo mismo la estabilidad de la suspension reclamada, cuya firmeza había sostenido el que suscribe requiriendo al C. Gobernador sobre su cumplimiento, lo que acató este alto funcionario, no era de deshacerse lo ya afianzado por dicho requerimiento cumplimentado, y además, que el embargo de unas fincas puede subsistir sin suspender el ejercicio de las máquinas é instrumentos de elaboracion, ni el trabajo de centenares de operarios que de ello subsisten con sus numerosas familias, que padecerían de hambre sin ese trabajo, y aun se amotinarian para obtenerlo.

Vista la queja contra el referido Juez 2º suplente C. Merelo, por haber mandado como mandó se permitiese ó no se embargasen á los administradores de las fincas embargadas hacer uso de los útiles de ellas, (que tambien estaban embargados) á efecto de evitar el perjuicio que pudiera resultar si se paralizaran los trabajos de las fincas, sobre cuya queja solo puedo conocer y decidir la Suprema Corte de Justicia al revisar el juicio principal de amparo, del que,

como al principio se dijo, estas diligencias no son sino un incidente aclaratorio del auto suspensivo; resérvense dichas diligencias para remittirlas á esa respectable superioridad con el mencionado juicio, terminado que sea, sacándose copia de este auto para su publicacion con el que recaiga en aquel, y reponiendo la Direccion de rentas el papel que sea de reponerse en este incidente.

Lo decretó y firmó el C. Juez interino de Distrito del Estado. Doy fé.—*Mariano Sansalvador*, una rúbrica.—*José Anastasio Pego*, secretario, una rúbrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Enero 23 de 1874.—*Mariano Sansalvador*.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio 25 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Francisco Cagigal, en representacion de D. Pio Bermujillo, ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, contra los procedimientos del C. Director de Rentas del Estado, que le embargó sus haciendas de Chiconcuac, Dolores y San Vicente, por un adeudo que segun el mismo Director, tienen dichas fincas en favor del Fisco de los Estados de México, Hidalgo y el referido de Morelos, por derechos de traslacion de dominio en la venta con pacto de retroventa que en 30 de Octubre de 1851 celebró D. Anacleto Polidura en representacion de su esposa Dª Josefina Eguía á favor de D. Miguel Ajuía, alegando el quejoso que con este procedimiento se le atacan las garantías que reconoce la carta fundamental de la República en sus artículos 14, 16, 17, 20 fraccion 5ª, 21, 22, 27 y 28, en virtud de que despues de haberse definido judicialmente la responsabilidad pecuniaria que las mencionadas fincas reportaban por ese contrato, celebró una transaccion con el Ejecutivo de la Union, pagándole la cantidad de quince mil pesos en efectivo, y doce en cré-

ditos de la Sección liquidataria, cuya transacción elevada á escritura pública y aprobada judicialmente, lo eximió de toda responsabilidad, obligándose el mismo Ejecutivo á entenderse y arreglarse sobre cualquiera reclamación que pudiera representarse sobre este negocio; que por lo mismo no se cree obligado al segundo pago que se le exige, de las cantidades de once mil novecientos ochenta y seis pesos setenta centavos por el contrato de venta de que se hizo referencia, de igual cantidad por el contrato de retroventa, y de la cantidad de ciento ochenta y ocho mil trescientos pesos noventa y ocho centavos, por multa, recargos, y gastos de cobranza, cuyas cantidades forman la de doscientos doce mil doscientos setenta y cuatro pesos treinta y ocho centavos. Visto el informe del C. Director de Rentas, exponiendo entre otras razones, para fundar sus procedimientos: que habiéndose causado en los años de 1851 y 1852, alcabalas por derechos de traslación de dominio de las fincas mencionadas, conforme á la ley de 1.º de Mayo de 1851 del Estado de México, á este Estado correspondía hacer efectivo el cobro con todos los recargos y multas que la misma ley establece; y que dividido el antiguo Estado de México en los tres de Morelos, Hidalgo y México, á los tres corresponde ese pago, sin poder pasar por el que hizo Bermejillo al Gobierno general, por ser un pago indebido. Vista la prueba rendida por el quejoso, por la que aparece que se pronunciaron dos sentencias por el Juzgado 1.º de Distrito de esta Capital, una en 24 de Febrero de 1858, por la que se absolvió á la testamentaria de D. Miguel Ajuria de la denuncia que contra ella se hizo por el pago de la alcabala de la retroventa de las mencionadas haciendas, y la otra en 30 de Junio de 1860, por la cual se condenó á D. Anacleto Polidura, en representación de su esposa D.ª Josefina Eguía, al pago del derecho de traslación de dominio por el contrato de la venta primitiva de 30 de Octubre de 1851:

que apelada esta sentencia y otorgada la apelación solo en el efecto devolutivo, se procedió á su ejecución, embargándose las haciendas de Dolores, San Vicente y Chiconcuac por la insolvencia del deudor principal, y en virtud de la acción hipotecaria, poniéndole de depositario al mismo Sr. Bermejillo: que sustanciándose diversos artículos sobre la cantidad en que se debía hacer efectivo este cobro, transcurrió el tiempo hasta el 10 de Noviembre de 1868 en que el Lic. D. Pedro Ruano denunció las citadas alcabalas ante el C. Gobernador del Estado de México, quien en la misma fecha se dirigió al Ministerio de Hacienda sosteniendo los derechos de Estado y pidiendo se le remitieran los autos pendientes en el Juzgado de Distrito: que el Ministerio de Hacienda transcribió esta petición al Juzgado de Distrito para que verificara esta remisión, sino había inconveniente legal; y sustanciado artículo sobre este punto, con audiencia del primer denunciante y del Promotor fiscal, quienes se opusieron sosteniendo los derechos del fisco federal al cobro ya referido, con todo lo que se dió cuenta al Ministerio de Hacienda: que en 3 de Abril de 1869 se le previno á Bermejillo por el mismo Juzgado de Distrito, ándiera cuentas justificadas de los productos de las haciendas como depositario, á cuya prevención se opuso, ante otros motivos por incompetencia del Juez, en razón de que las alcabalas pertenecían al Estado de México y no á la Federación, sobre lo cual se sustanció un nuevo artículo con audiencia del Promotor fiscal y del denunciante, quienes sostuvieron la jurisdicción y la propiedad federal, resolviéndose en 16 de Octubre del mismo año, que no era de revocarse lo mandado y que D. Pio Bermejillo rindiera la cuenta que se le había prevenido, ó entregara el importe de la cantidad de once mil novecientos ochenta y cinco pesos, cuarenta y tres y medio centavos, aperebido de lo que hubiera lugar: que en esa virtud celebró la transacción antes referida, que fué aprobada por

sentencia de 17 de Mayo de 1870, declarándose libres de toda responsabilidad las haciendas mencionadas, por el pago de las alcabalas causadas en la venta y retroventa.

Visto el alegato del C. Promotor fiscal; la sentencia que en 20 de Enero del presente año pronunció el C. Juez de Distrito de Morelos; que declaró haberse violado en la persona de D. Pio Bermejillo las garantías de los artículos constitucionales 14, 16, 17, 21 y 22; y que no concedía amparo por las garantías de los arts. 20 fracción 5ª, 27 y 28 de la misma Constitucion.

Visto el incidente de amparo promovido por el Director general de Rentas C. Lino Nava, ante el Juez interino de Distrito, contra el auto de suspension del acto reclamado, pronunciado por el 2º suplente del mismo Juzgado que al principio conoció del principal, juzgando que con dicho auto se vulneraba la soberanía del Estado, y alegando este nuevo amparo la fracción 2ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

La resolucíon que el mismo Juez interino dictó en 8 de Enero último, mandando agregar este incidente al juicio principal, para que esta Corte Suprema lo tuviera á la vista en la revision; el alegato que ante este mismo Tribunal presentó el quejoso contrariando la setnedcia del inferior en los puntos por los que le negó el amparo y fundándolos en las razones que creyó mas convenientes; la exposicion que el Ejecutivo de la Union remitió á esta misma Corte, en que inserta un ocurso que el interesado le dirigió y acompaña un informe para fundar el derecho con que el mismo Gobierno celebró una transaccion con D. Pio Bermejillo, alegando: que estos aducidos eran de la propiedad federal por la ley de 14 de Mayo de 1853; que en esta virtud, por la de 1º de Enero de 1856, consignó estos capitales al fondo de amortizacion de la deuda; y visto todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando 1º que de todas estas constancias aparece, que este negocio tiene el

carácter de litigioso, ya porque se disputa entre los tres Estados de Morelos, México ó Hidalgo por una parte, y del Ejecutivo de la Union por otra, la propiedad al producto de esas alcabalas; ya porque se cuestiona si el pago hecho por Bermejillo al Ejecutivo federal, fué ó no un pago indebido.

2º Que el principio en que se fundó la Direccion de Rentas del Estado de Morelos para practicar el embargo de las haciendas de D. Pio Bermejillo, fué el jurídico de que el Fisco no litiga despojado, y en el presente caso no tiene aplicacion, tanto porque el Fisco de la Union está en posesion de estas alcabalas con anterioridad al embargo, como porque la accion real que en caso de responsabilidad que esas haciendas reportasen en favor de los Estados, puede ejercitarse contra cualquiera poseedor.

3º Que el derecho con que el Estado de Morelos cobra á Bermejillo las alcabalas causadas, lo hace derivar no de sí propio, sino tambien en nombre de los otros Estados, sin haber acreditado ni la representacion legal de estos, ni la cantidad proporcional que á cada uno correspondería por la division del antiguo Estado de México, resultando: que esta reclamacion en lo que toca al Estado de Morelos, es ilíquida.

Que de estos principios asentados se deduce naturalmente, que siendo cuestion litigiosa, de ella debe conocer el tribunal competente que previamente haya establecido la ley, para no violar el art. 14 constitucional; que no hay motivo legal para fundar el procedimiento del embargo, y que con él se viola la garantía consignada en el art. 16 de la misma Constitucion; y que la autoridad administrativa invadió las facultades de la autoridad judicial federal, consignadas en el art. 98 del mismo Código.

Considerando en cuanto al incidente de amparo, contra la suspension del acto reclamado en el promovido por Bermejillo: que la prevencion de la ley de 20 de Enero de 1869 en su art. 6º es terminante, y no admite mas recurso que el de responsabilidad

contra el Juez que dictó este auto: que por tanto el C. Lino Nava que introdujo este nuevo amparo, se hizo acreedor á la pena que consigna el art. 16 de la ley citada.

Por estas consideraciones se declara: Que es de reformarse y se reforma la sentencia del inferior, y se decreta:

1º Que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Pío Bermejillo, contra el embargo que practicó el director de Rentas del Estado de Morelos en las haciendas de su propiedad, llamadas San Vicente, Dolores y Chiconcuac.

2º Que se impone la multa de cien pesos al C. Lino Nava personalmente, y no como Director de Rentas del Estado de Morelos, por haber interpuesto amparo contra el acto de suspension decretado en el principal.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos respecto del primer punto, y por mayoría respecto del segundo, lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 1º de 1874.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Veracruz por el C. Pablo Hernandez, contra los procedimientos de la Comandancia militar, en virtud de los cuales fué reducido á prision por sospechas de haber promovido la desercion entre varios soldados del Batallon número 3.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Pablo Hernandez, solicita amparo y proteccion de la Justicia federal, contra el procedimiento del C. Coronel del Batallon 3º de infantería que lo redujo á prision, con pretexto de que se habia hecho sospechoso, pidiendo al mismo tiempo la suspension del acto reclamado que le fué denegada, por las razones que se expresan en providencia de 25 de Abril último, y habiéndose pedido en seguida el informe justificado que la ley previene, al expresado C. Coronel, lo emitió contrariando los hechos que se relacionan en el ocurno y explicando los motivos que tuvo para haber concebido sospechas contra el quejoso, que estaba induciendo á la tropa á que hiciera algo que ignoraba el informante, por lo que se recibió á prueba este juicio, resultando de las declaraciones tomadas á los soldados con quienes habló en el cuartel el C. Hernandez, que no se les aconsejó la comision de ningun delito, ni siquiera que usaran del derecho de pedir amparo, negándose á defender al que le suplicó que lo patrocinara, no habiendo tenido participio alguno en la desercion del soldado que cita en su informe el C. Comandante militar, y que las veces que concurrió al expresado cuartel, se limitó á tomar instrucciones de sus defendidos, José Dávila, José Dolores Pasten y Ramon Sanchez, para producir pruebas en su favor, en el juicio de amparo que tenian promovido, y á leerles los escri-